

La crisis fiscal y económica y la política presupuestaria de Reagan

James O'Connor

I.

Este artículo se propone brindar un pronóstico de las políticas económicas del gobierno de Reagan, prestando una atención particular a las políticas presupuestarias de la administración. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Reagan en el frente presupuestario y qué es lo que podrá llevar a cabo? Una respuesta clara exige una evaluación de la crisis fiscal del Estado y su relación actual con la crisis general del capitalismo. La política de Reagan se basa en la teoría de que la crisis económica en general y la inflación en particular son causadas por la sobrecarga fiscal, los déficit del presupuesto federal, la regulación gubernamental, la política de asistencia social, etcétera, fenómenos originados por una excesiva intervención gubernamental en la economía.¹ El marxismo tradicional propone exactamente la teoría opuesta. Desde este punto de vista, la sobrecarga fiscal y las tendencias a la crisis fiscal han surgido debido a la crisis económica general, que se explica en términos de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, cuyo efecto es reducir los impuestos relativos a las necesidades sociales y económicas. Mi análisis considera que la crisis general se origina en la lucha de clases, incluyendo la lucha por extender y ampliar el presupuesto social (en este sentido Reagan tiene razón), y que la crisis general ocasiona crecientes cargas en el presupuesto estatal, en particular en los programas de los gobiernos locales y de los derechos establecidos en el nivel federal (en este sentido el marxismo tradicional tiene razón).

¹ Una crítica más completa de las políticas de Reagan en general y de la economía de la oferta en particular puede hallarse en James O'Connor, "Accumulation Crisis: the Problem and its Setting" [Crisis de acumulación: el problema y su contexto]. *Contemporary Crisis*. 1981. Cabe mencionar, sin embargo, que había menos empleados federales en 1980 que en 1968, y que el gasto federal con respecto al PNB era prácticamente el mismo en 1980 que en 1968 (22.1% frente a 21.5%).

Sin embargo, el enfoque adoptado en este artículo difiere en dos aspectos del marxismo tradicional. En primer lugar, en mi opinión la tasa de ganancia decreciente no se debe a una sobreproducción de capital (como lo sostiene el marxismo tradicional) sino más bien a una baja producción de capital provocada por la lucha de clases. Desde este punto de vista, la baja producción de capital surge debido a que la canasta media de consumo individual es demasiado amplia; el valor del contenido de la canasta media es excesivo; el consumo colectivo medio es demasiado elevado; el valor del contenido de la canasta media de consumo colectivo es demasiado grande; y la fuerza de trabajo es demasiado inmóvil y poco flexible, de ahí que su papel como capital variable se debilite, esto es, como capital productor de plusvalor. En segundo lugar, la crisis fiscal no deriva estrictamente de la crisis general del capitalismo, sino que más bien se desarrolla de acuerdo con su propia lógica, que se relaciona recíproca y dialécticamente con la crisis económica general.

El planteo de que la crisis general del capital se debe a una baja producción de capital y de que la crisis fiscal es "relativamente autónoma" requiere alguna defensa teórica. Este artículo, sin embargo, no es el lugar apropiado para una defensa de la primera tesis (desarrollada extensamente en un trabajo en curso llamado *Accumulation crisis* [Crisis de acumulación]) porque en estas páginas tan sólo enfoco la relación entre la crisis fiscal y la política presupuestaria. Por esta razón, es importante defender la segunda tesis.

La mejor manera de llevar a cabo esta defensa es echar un vistazo retrospectivo a mi libro *The Fiscal Crisis of the State*² [La crisis fiscal del Estado] para responder a ciertas críticas que tanto el marxismo ortodoxo como el neomarxismo formularon a dichas tesis. Este es esencialmente el propósito de la segunda parte del presente artículo, que se propone contraatacar los argumentos de los marxistas ortodoxos y de los funcionalistas. En la tercera parte me dedico a la relación esencial entre la crisis fiscal y la crisis económica general durante los años setenta. Como lo mencioné antes, éste no es el lugar apropiado para un análisis completo de tales temas, por lo tanto sólo brindo un esbozo de las relaciones recíprocas entre las condiciones económicas generales y el actual presupuesto estatal, con algunas referencias a los efectos probables de las políticas económicas y presupuestarias de Reagan. Este trabajo habrá sentado las bases para la cuarta y última parte del presente artículo en que se evalúa más extensamente el presupuesto de Reagan para averiguar qué es lo que está tratando de hacer y también qué posibilidades tiene de salirse con la suya indefinidamente. El problema presupuestario, así como el problema económico general, son considerados en el mismo nivel que el problema del restablecimiento de la dominación política y social del capital sobre el trabajo.

² St. Martin's Press, Nueva York, 1973.

II.

The Fiscal Crisis of the State intentaba ser una intervención práctica y teórica en los debates y luchas sociales que estallaron en Estados Unidos al final de los años sesenta y a principios de los setenta. *Fiscal Crisis* se proponía concretamente ayudar a que el enfoque de la izquierda norteamericana pasara de los trabajadores industriales a las posibilidades radicales de las organizaciones y de las acciones de los trabajadores y clientes del Estado. La premisa del libro (formulada inadecuadamente) era, en primer lugar, que las condiciones materiales de los trabajadores y clientes del Estado están determinadas políticamente en el doble sentido de que cada problema enfrentado por esas categorías es un problema político y de que los trabajadores y clientes del Estado son objeto de estrategias de consenso político aplicadas por la clase política gobernante, que a su vez influye en los intereses de los trabajadores y clientes del Estado y en la manera en que esos intereses son representados políticamente.³ En este sentido estrecho, dichas fracciones de la clase trabajadora pueden ser consideradas como una vanguardia política. En segundo lugar, la premisa era que los trabajadores del Estado son la *única* fracción de la clase trabajadora que tiene un poderoso interés material en la unión de las otras dos grandes fracciones del proletariado (trabajadores productivos/ejército de reserva; trabajadores del sector monopolista/trabajadores del sector competitivo: contribuyentes de la clase trabajadora empleados por el capital privado/clientes del Estado). En este sentido, los trabajadores del Estado conforman una vanguardia política en la medida en que son la fracción de clase que cumple con la condición básica de Marx para la unidad de la clase trabajadora, esto es, “cooperación permanente entre los empleados y los desempleados”.

Este interés en los trabajadores y clientes del Estado no era una postura inusitada en los años sesenta debido a las rebeliones de los negros, las revueltas estudiantiles, movimientos de organización de los empleados estatales, etcétera, aunque sí lo fue cada vez más entre los nuevos círculos de izquierda que “se pasaron” al marxismo ortodoxo en los años setenta. Y esto a pesar del hecho de que, en los años setenta, algunas fracciones de la nueva izquierda que se atuvieron a las premisas originales relativas al desplazamiento de la lucha de clases dentro del Estado se aliaron a fuerzas más antiguas socialdemócratas/*new deal* dentro de la burocracia estatal (especialmente en el sector educativo y en el de la salud y la asistencia social) que, como resultado, es más progresista hoy en día que hace una década o una década y media.

Teóricamente, *Fiscal Crisis* se alineaba en contra de la opinión marxista ortodoxa de que el Estado capitalista funciona desde el punto de vista del capital en su conjunto tan sólo para asegurar las condiciones

³ Quiero agradecer a Carlo y Lela Carboni por ayudarme a formular este problema.

de la acumulación capitalista.⁴ Y también la opinión emparentada de que la función de los sindicatos obreros y los partidos socialdemócratas es contener e integrar a la clase obrera en el orden social capitalista. *Fiscal Crisis* defendía la tesis de que el Estado moderno es “un objeto de la lucha de clases [...] la política social [es] el resultado contradictorio del compromiso entre el capital y un movimiento obrero fuerte”.⁵ Este planteo, que opone inalterablemente la “lógica del capital” marxista y los métodos funcionalistas, ha ganado creciente aceptación en Estados Unidos, Italia, España, Francia (como lo prueba el último libro de Nicos Poulantzas) y en algunos países del Tercer Mundo, así como, en un grado significativamente menor, en Inglaterra y Alemania donde la “lógica del capital” parece estar haciendo un último intento de defensa.⁶

Fiscal Crisis se basaba en dos principales divergencias teóricas respecto al análisis marxista ortodoxo del presupuesto estatal. La primera era el análisis de ciertos gastos y actividades materiales del Estado como capital social, o inversión social/consumo social, o capital social constante/capital social variable. Este concepto de capital social me permitió estudiar las significaciones cuantitativas y cualitativas de ciertos tipos de intervencionismo estatal. Cuantitativamente el capital social *ceterus paribus* aumenta la tasa de explotación, por lo tanto las tasas medias de ganancia y de acumulación de capital. Cualitativamente, sin embargo, el capital social “contamina” las relaciones de producción capitalistas porque el transporte, la educación, los servicios de salud y así sucesivamente, en la medida en que están organizados por el Estado, no se basan exclusiva-

⁴ Por ejemplo, John A. Fry se refiere al “carácter burgués de clase del Estado[...] y su englobadora función de mantener y promover las condiciones favorables para una economía basada en una relación entre el capital y el salario laboral” (*Limits of the Welfare State: Critical Views on Post-War Sweden*, Franborough, Inglaterra, 1979, 2).

Debo añadir que *Fiscal Crisis* también fue escrito como una crítica de la estéril teoría burguesa de las finanzas públicas basada en el concepto de “elección individual”. Jared Epstein ha señalado que resulta un tanto extraño escuchar a los sociólogos y economistas burgueses utilizar o volver a introducir el concepto de “individual” en un período en que el ataque del capital a la clase trabajadora como tal es tan severo. Pero, por supuesto, las ideologías del individualismo son necesarias para atacar el trabajo verdadero de la clase trabajadora.

⁵ John D. Stephens, “Reseña”, *Limits of the Welfare State*, op. cit., *Contemporary Sociology*, 10, 1. enero de 1981, 112, cita el libro de Korpi *The Working Class in Welfare Capitalism*. Para una defensa de *Fiscal Crisis* en contra del marxismo ortodoxo, véase mi artículo “Some Reflective Criticisms on Mosley’s ‘Critical Reflections on The Fiscal Crisis of the State’”. [Algunas reflexiones críticas sobre las reflexiones críticas de Mosley en torno a *The Fiscal Crisis of the State*], *Review of Radical Political Economics*, LL, 3, otoño de 1979.

⁶ La escuela de la “lógica del capital” también ha sido atacada por argumentos según los cuales el Estado es la “institucionalización” de la anarquía, ya que las metas de la clase capitalista (cualesquiera que sean esas metas políticamente) son puestas en tela de juicio por los capitalistas individuales y las fracciones capitalistas que actúan en su propio interés particular.

mente en un criterio de intercambio de valores. En resumen, la primera divergencia teórica era analizar ciertos gastos estatales como formas sociales de capital avanzado o como costos de capital, no como ingresos o deducciones en el plusvalor.

La segunda divergencia respecto al marxismo ortodoxo era el análisis de otros gastos del Estado como “gastos sociales”. El concepto de gastos sociales es perfectamente compatible con la ortodoxia puesto que tanto los “ingresos estatales” como los “gastos sociales” son deducciones del plusvalor y, por lo tanto, forman un obstáculo a la producción de capital en la medida que ayudan a resolver el problema de la realización de capital. Disentí del marxismo tradicional por cuanto afirmé que los gastos sociales son el precio que el Estado debe pagar por el consenso político y la legitimación. Los críticos ortodoxos han señalado que el concepto de legitimación no existe en el pensamiento marxista tradicional. Sostienen que los gastos sociales son en realidad formas transitorias que se aplican o no según los niveles de inconformidad popular y no según las necesidades sociales, y que, por lo tanto, ejemplifican el control social *por* el Estado y no la legitimación *del* Estado, de la democracia representativa y/o del propio capitalismo. Sin embargo, las opiniones de los marxistas a este respecto no siempre son coherentes. Por ejemplo, Bullock y Yaffe escriben que “las contradicciones del Estado capitalista se ven agravadas precisamente en un período de crisis creciente. Trata de restablecer la tasa de ganancia para el capital privado y a la vez sigue *necesitando garantizar* un nivel de empleo ‘políticamente’ aceptable”.⁷ En *Fiscal Crisis*, en efecto, coincido con Habermas en que las presiones por la legitimación son creadas por la intervención del Estado en la vida económica y social (capitalismo político, la sociedad administrada). Si las legitimaciones requeridas llegan a faltar debido a varios tipos de “déficit de motivación”, las resultantes mermas de legitimación deben ser compensadas por gratificaciones materiales.⁸ Mi opinión también era (y sigue siendo) que en el capitalismo moderno las clases dominadas, es decir las clases trabajadoras, son potencialmente las clases dominantes y que, por lo tanto, el Estado debe asegurar los costos económicos y sociales de la acumulación o encontrar un “equivalente funcional”, so pena de perder su capacidad de garantizar el consenso político e ideológico.

Los escritores pertenecientes a la tradición de la “teoría crítica” reprobaron la manera en que usé el concepto de legitimación, alegando que hice poco caso de esos “equivalentes funcionales” o los ignoré. Como lo sugiere John Keane, *Fiscal Crisis* no establece una clara distinción entre integración del sistema/racionalidad del sistema e integración social/ra-

⁷ Paul Bullock y David Yaffe, “Inflation, the Crisis and the Post-War Boom” [La inflación, la crisis y la expansión posterior a la segunda guerra mundial], *Revolutionary Communist*, 3/4, noviembre de 1975, 35 (las cursivas son mías). [Hay edición en español].

⁸ Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*. Boston, 1975, capítulos seis y siete. [Hay edición en español.]

cionalidad social. La razón de ello es que yo escribí *Fiscal Crisis* ante todo como economista político y no como "sociólogo economista político". El resultado fue que no logré advertir el hecho de que la integración social puede ser posible con base en nuevos símbolos sociales y políticos o en la manipulación de viejos símbolos por parte de los líderes culturales, los políticos, etcétera. Claus Offe, por ejemplo, arguyó a principios de los años setenta que las reivindicaciones "sin costo" para el Estado aumentan potencialmente la integración social sin implicar prácticamente gasto material alguno y, por consiguiente, sin agravar las tendencias a la crisis del sistema fiscal o económico.⁹ Dicho de otro modo, consenso y legitimación son cuestiones de integración social que pueden o no ser vulnerables al desajuste del sistema económico o a la crisis del sistema.

La respuesta a esta crítica no consiste en negar su validez metodológica sino más bien en poner en tela de juicio su aplicabilidad, en particular durante los años sesenta y principios de los setenta.

En un sentido, la legitimación puede definirse como las razones que da el Estado al público para encubrir los verdaderos objetivos de los programas y de las políticas del Estado. Hoy en día, en los Estados Unidos del gobierno de Reagan, por ejemplo, "desreglamentación de los negocios y competencia creciente" significa apresurar la restructuración del capital en crisis, incluyendo la concentración y la centralización de capital, y también aumentar la movilidad del trabajo. "Incentivos fiscales para los negocios" significa aumentar las ganancias del nuevo capital en el sur y en el oeste en detrimento del viejo capital (y de la clase obrera tradicional) en el este y en el medio oeste. "La economía de la oferta" es el disfraz de un programa que trata de reducir el tamaño y el contenido en valor de la canasta de consumo privada y colectiva con miras a aumentar prontamente la tasa de explotación. En este sentido del concepto "legitimación", el éxito económico presupone el éxito ideológico. Las mayores ganancias y la acumulación presuponen una legitimación o una hegemonía exitosa que, suponiendo que las políticas ideológicas del Estado sean internamente coherentes, promueve la integración social. Esto es sencillamente una manera de decir que para funcionar eficazmente el sistema económico necesita precaverse en contra del disfuncionamiento social.

Pero hay otra definición más importante de la legitimación. La integración social no sólo requiere ciertos sistemas de creencias y ciertas acciones normativas sino también recursos materiales. Los símbolos pueden

⁹ Las reivindicaciones que no implican costo alguno para el Estado, así como los símbolos relativos a las fuerzas en pro del aborto, en pro del divorcio fácil, anti-discriminatorias, en pro de la libertad sexual, etcétera, han sido confrontadas políticamente, por supuesto por las nuevas fuerzas "pro vida", las nuevas formas de racismo, etcétera, que han polarizado la sociedad estadounidense, elevado la apuesta política y vuelto cada vez más ineficaces las reivindicaciones "sin costo alguno". En efecto, el precio por utilizar las reivindicaciones "sin costo alguno" para aliviar la crisis fiscal fue agravar las tendencias a la crisis social.

legitimar las ganancias o las políticas de acumulación pero los recursos materiales son necesarios para legitimar el proceso de acumulación (esto es, la acumulación capitalista en medio de la crisis) frente a las fracciones de clase que no participan en el crecimiento económico y en el desarrollo o que lo padecen. Esto es particularmente cierto durante los períodos de crisis y de restructuración del capital cuando surgen exigencias para mantener e incrementar el consumo social y los gastos sociales a fin de compensar la disminución del consumo privado. Este hecho es en parte la razón fundamental del crecimiento de los “derechos adquiridos” que a su vez tiene verdaderas consecuencias materiales. La más importante es la redistribución de recursos materiales de la llamada clase media a la llamada clase baja, cuyo resultado es el supuesto debilitamiento de las motivaciones e incentivos capitalistas. Los incentivos dentro de la “clase media” son menoscabados porque ésta “no recibe suficiente”. Los incentivos dentro de la “clase baja” son debilitados porque ésta “recibe demasiado”. Dicho de otro modo, las políticas de integración social en una sociedad que tiende a reducirlo todo al común denominador más bajo, el dinero, son caras, y también provocan malos ajustes entre las motivaciones individuales y las funciones del sistema.¹⁰ Esto explica las políticas de Reagan de distribución general del ingreso que pueden resumirse como la zanahoria para los capitalistas y para los trabajadores y asalariados mejor pagados por un lado, y el palo para los trabajadores menos pagados y los desempleados por otro. Esta política de redistribución, legitimada por su descabellada teoría económica de la oferta, funciona para dividir a la clase trabajadora.¹¹

Cuando estas dos rupturas con la ortodoxia marxista —los conceptos de capital y legitimación social/gastos sociales— se combinan en una teoría general del presupuesto estatal, resulta fácil responder a la pregunta ¿por qué crece el Estado? Algunas respuestas tradicionales han recalcado los efectos de la guerra y sus consecuencias; crecimiento del volumen absoluto de capital; necesidad de controlar a la clase trabajadora; luchas por derechos adquiridos universales, etcétera. Sin querer negar la validez de cualquiera de estas ideas, la respuesta que el lector hallará en *Fiscal Crisis* es que el capital social asegura la acumulación privada capitalista que a su vez aumenta las exigencias de gastos sociales para prevenir o remediar los “costos sociales” de la acumulación. En este sentido específico e indirecto, “el Estado crece porque crece”. Esta sencilla teoría pone

¹⁰ Hay muchos otros aspectos del problema de la legitimación que no podemos detallar aquí. Como lo muestra Regini, por ejemplo, la participación de los sindicatos en la política estatal puede ayudar a integrar a los trabajadores en el orden social, no porque los propios sindicatos sean forzosamente fuentes de control social, sino más bien porque la mera presencia de los sindicatos en el aparato estatal aumenta la legitimidad capitalista y, por lo tanto, la integración social.

¹¹ La versión extrema de esta supuesta teoría puede encontrarse en *Wealth and Poverty* de George Gilder (Nueva York, 1980), que afirma que el Estado ha arruinado la economía de Estados Unidos por imponer demasiados impuestos a los capitalistas y por otorgar demasiada asistencia social a los pobres.

de relieve una de las más profundas contradicciones de la sociedad capitalista tardía y de las finanzas públicas.

Sin embargo, surge de inmediato la siguiente pregunta: ¿acaso el Estado norteamericano crece siempre o forzosamente porque crece? Si bien esto fue cierto en los años sesenta y a principios de los setenta, ¿sigue siendo cierto para finales de los años setenta y será cierto para los años ochenta? Se podría argüir razonablemente que los años sesenta y los primeros años de la década de 1970 fue un período especial en el doble sentido de que la economía estaba en expansión y al mismo tiempo la guerra de Vietnam, la proletarianización de los negros y de las mujeres, la industrialización de la enseñanza superior, y así sucesivamente, estaban debilitando los tradicionales símbolos legitimadores norteamericanos de paz y prosperidad, oportunidades familiares y económicas, igualdad y libertad, etcétera. Así, esos fueron años en que la integración social *podía y tenía* que comprarse difícilmente a pesar de la inflación monetaria. Desde esta perspectiva, podría argumentarse que el partido demócrata no se ha recuperado todavía de su fracasado intento de desarrollar una estrategia de austeridad (incluyendo las ideologías de la austeridad) para la crisis económica general que pudiera proteger mínimamente a la clase trabajadora tradicional del partido, los negros de las ciudades, y los distritos electorales de bajos ingresos, de mayores privaciones económicas.

Este tipo de argumentos que vinculan la teoría social y económica con *coyunturas históricas* particulares ponen en tela de juicio algunas de las desafortunadas formulaciones “funcionalistas” de las tesis fundamentales de *Fiscal Crisis*.¹² El carácter poco problemático de estas formulaciones del problema de las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad queda evidenciado no sólo por las especulaciones acerca de experiencias norteamericanas como las expuestas más arriba, sino también por desarrollos históricos en algunos países europeos. En Italia, por ejemplo, Marino Regini no puede encontrar ninguna “lógica clara de acción del Estado”, ya sea “lógica del capital” o “lógica de acumulación/legitimación”. La razón de esto parece ser que la acción del Estado en Italia es el resultado de un “sistema de premiar servicios de partido con empleos públicos” basado en relaciones de clientela, conflictos y compromisos en el que actores privados reparten los recursos y, por lo tanto, en que las

¹² Por ejemplo, “mientras más aumenta el capital social, más aumenta el sector monopolista. Y mientras más aumenta el sector monopolista, mayores son los gastos estatales de producción (*Fiscal Crisis, op. cit.*, p. 9). Esta formulación es incompleta aun como afirmación de relaciones funcionales, esto es, deja sin determinar el crecimiento del capital social que, como veremos, debe relacionarse (problemáticamente) con el hecho de que el capital privado se encuentre en expansión o en crisis. Como lo mencioné antes, también deja sin determinar los efectos de una expansión de gastos sociales en base a plusvalor disponible para la acumulación.

políticas estatales pueden ser “repartimientos sin ninguna coherencia” y, por consiguiente, no conducen necesariamente ni a la acumulación ni al consenso.¹³ Creo que este tipo de análisis puede aplicarse igualmente a Estados Unidos, con la importante diferencia de que este sistema de premiar servicios de partido con empleos públicos funciona por medio de agencias estatales bien establecidas, comités del Congreso, el sistema legal, etc., y no mediante encuentros más directos entre representantes del capital, del trabajo, de los granjeros, de los pequeños negociantes, etcétera, y sus diversas fracciones. Este feraz enfoque (que no está del todo ausente en *Fiscal Crisis*) ayuda, además, a sacar toda la discusión en torno al Estado, la economía y la sociedad del marco conceptual funcionalista/logicista para situarla en el contexto de las verdaderas luchas sociales, económicas y políticas en las que las diferentes fracciones de clase y los diversos intereses burocráticos y demás despliegan sus respectivas armas sociales. Además, si los aspectos históricos y coyunturales de todo el problema son igualmente recalcados, podemos elaborar un modelo de teoría y de acción más sólido. Por ejemplo, los elementos funcionalistas en *Fiscal Crisis* eran demasiado rígidos para aprehender el verdadero sentido del desarrollo europeo en los años sesenta y a principios de los setenta, cuando existía una correlación negativa entre acumulación capitalista y gastos sociales. En Francia y en Italia se encontrarían las tasas de crecimiento más altas y los gastos más bajos en servicios y medios médicos y sanitarios, vivienda social y transportes colectivos. La explicación común es que la elevada inflación acompañada de un rápido crecimiento de capital obligó a los gobiernos europeos a restringir los gastos sociales.¹⁴ Sin embargo, los gobiernos de Francia e Italia activaron el desarrollo del capital social, que aseguró el crecimiento económico en el sector del capital privado, llevando a un aumento de las necesidades y exigencias sociales de gastos sociales, que a su vez fueron políticamente frustradas, en parte por las razones expuestas más arriba, en parte debido a la naturaleza de los gobiernos en esos dos países. Esto, a su vez, contribuyó al surgimiento de las grandes huelgas al final de la década de los años sesenta y a principios de los setenta, cuyo efecto fue finalmente la multiplicación de las diversas “redes de seguridad” sociales en aquellos países y de su esfera de acción.

¹³ Como los Carboni tuvieron a bien señalarme, este enfoque ignora la dimensión total del “capital como un todo”, por lo tanto las posibilidades de mostrar que las contradicciones sociales son contradicciones de clase. En efecto, en el modelo del “sistema de premiar servicios de partido con empleos públicos”, los conflictos se presentan como meros conflictos específicos sin ninguna relación con luchas sociales y de clase.

¹⁴ Por ejemplo, Richard B. DuBoff, “Economic Ideology and the Environment” [Ideología económica y el medio ambiente], en Hans G. T. Raay y Ariel E. Lugo, *Mand and the Environment*, LTD, Rotterdam, 1974, 215-216, en que se cita el trabajo del economista de la CEE Michel Albert.

III.

El principal factor para la invalidación de los métodos funcionalistas en la teoría marxista ha sido la propia crisis general del capitalismo. Las "crisis", en el sentido de momentos históricos decisivos o tiempos de decisiones difíciles en que las instituciones y los individuos son duramente sometidos a prueba, son períodos en que no es posible aceptar las tradicionales relaciones "lógicas" entre el Estado, la economía y la sociedad como algo que cae de su propio peso. El capitalismo político, la fábrica social y la fábrica política, desarrollan nuevas relaciones funcionales altamente problemáticas que, de modo característico, sólo pueden ser comprendidas como tales *a posteriori*. Las "crisis" también significan nuevas *definiciones* tanto del sistema como de las funciones sociales. Esto es cierto en el plano de la teoría y de la práctica. Por ejemplo, el actual nivel de la demanda global es considerado como suficiente, o como más que suficiente, por los economistas de la administración Reagan. Esto explica las actuales redefiniciones prácticas de la integración social, por ejemplo el "regreso a la familia", el enjuiciamiento de la competencia del gobierno, etcétera. Desde este punto de vista, las crisis pueden definirse como luchas sociales de desenlaces muy inciertos en las que los propios métodos teóricos funcionales "funcionan" como una especie de control social.¹⁵

En este sentido, la teoría marxista ortodoxa sobre la actual crisis económica del capitalismo es funcionalista. Diferentes autores destacan diferentes "variables", pero casi todos los marxistas ortodoxos concuerdan en que la actual crisis es una clásica "crisis de sistema" de sobreproducción o sobreacumulación de capital. Mandel, Frank, Sweezy y otros han escrito que la política de la actual crisis consiste en la necesidad de que la clase obrera resista los esfuerzos del gran capital y del Estado por reestructurar la vida económica en detrimento de los niveles de vida y de las condiciones de trabajo actuales. En contraposición con esto, los neomarxistas, los "obreristas" y otras tendencias (por ejemplo, M. Castells, H. Cleaver y yo mismo) insisten en que la actual crisis es el resultado global o parcial de la lucha de clase en que la clase trabajadora se encuentra profundamente implicada. Por tanto, la verdadera necesidad no es restituir a la fuerza de trabajo su estatuto de mercancía relativamente bien pagada sino intensificar la lucha por la unidad de los obreros de fábrica, las amas de casa, las minorías oprimidas, los estudiantes, etcétera, en el sentido de clase, esto es, reintegrar las relaciones sociales dentro de la clase trabajadora a fin de destruir el estatuto de la fuerza de trabajo como mercancía.

¹⁵ La definición de la crisis como lucha de clase, y la crítica de la teoría durkheimiana tradicional, mecanicista, funcionalista y radical de la crisis puede encontrarse en: James O'Connor, "The Meaning of Crisis" [El significado de la crisis], *International Journal of Urban and Regional Research*, 1981.

De manera más específica, la teoría del marxismo ortodoxo sobre la crisis es que la sobreproducción de capital ha ocasionado una disminución relativa en los ingresos del Estado que a su vez producen mayores déficit presupuestarios. Surgen inexorables presiones políticas organizadas por el capital a fin de reducir el presupuesto social. Se piensa que estas presiones son aún mayores que las que se desataron en los años treinta debido al elevado nivel actual de inflación y a los probables efectos de los déficit presupuestarios en la futura inflación. Las tendencias a la crisis fiscal que analicé en mi libro, o sea el desarrollo interno de contradicciones entre los gastos del Estado y los ingresos del Estado, son pasadas por alto o ignoradas. Esta táctica me parece excéntrica precisamente porque la crisis fiscal moderna surgió mucho antes que la actual crisis económica general.

Como lo sugerí más arriba, la actual crisis económica general en Estado Unidos no es, en mi opinión, una crisis de sobreproducción de capital sino de baja producción de capital. Las soluciones a las clásicas crisis de sobreproducción posteriores a la segunda guerra mundial (crédito al consumidor, deuda hipotecaria, asistencia social y otras tendencias y políticas desarrolladas para asegurar la competencia de los productos capitalistas y la comercialización de productos básicos) han llevado al capitalismo estadounidense hasta el punto de baja producción de capital. De modo más específico, el crecimiento del consumo social y privado, desde el punto de vista tanto del volumen como del valor de la canasta de consumo, ha provocado una insuficiente producción de plusvalor libre de inflación. Y debido al aumento de los gastos sociales, incluyendo los gastos militares y policiacos, existe una fuerte deducción improductiva del plusvalor que *es* producido. En resumen, en mi opinión, la crisis económica general debe explicarse en parte en términos de las fuerzas sociales y de las luchas que llevaron a la crisis fiscal de los años sesenta y setenta.

Quisiera continuar con este tema esbozando algunas de las relaciones entre la crisis general y la crisis fiscal. A partir de los primeros años de la década de los sesenta, el crecimiento del capital social y de los gastos sociales (junto con el desplome parcial de los gastos sociales en consumo social que ocurrió a causa del crecimiento de los "derechos adquiridos") aumentó el gasto del Estado con relación al gasto total. Esto tuvo por efecto involuntario pero no indeseable la estabilización del ciclo capitalista y el fortalecimiento de las tendencias a largo plazo de crecimiento económico. El resultado fue el mantenimiento de empresas capitalistas ineficientes, el fortalecimiento de los sindicatos, la creación de una resistencia cultural y social a la inmovilidad del trabajo, etcétera. Además, el crecimiento del gasto estatal con relación al gasto total fue financiado en parte por medios inflacionarios (por ejemplo, los déficit presupuestarios a nivel federal financiados por préstamos que el Estado se hacía a sí mismo). El resultado fue el fortalecimiento de la relativa decadencia en la formación de capital en Estados Unidos, y la absoluta decadencia en las zonas industriales más antiguas del país. La inflación tuvo por efecto desalentar las inver-

siones a largo plazo por parte del capital. En muchas localidades, en particular en el medio oeste, existe lo que puede considerarse prácticamente como una huelga de capital industrial, que por supuesto agrava las tendencias a la crisis fiscal en el nivel de los gobiernos locales.

Además, la inflación brinda incentivos al gran capital para dar en arrendamiento más trabajo subcontratado al pequeño capital y trabajo doméstico mal pagado, pues los sueldos son bajos, las prestaciones sociales inexistentes y la fuerza de trabajo es más variable. En Inglaterra, pequeñas compañías subcontratistas son creadas estructuralmente a partir de la necesidad del gran capital de mantener el sector competitivo y el ejército laboral de reserva.¹⁶ En Italia, según Enzo Mingione, el resultado es que la "sociedad organizada tiende a incurrir en costos elevados de asistencia social para los subpagados o para aquellos cuyo ingreso está por debajo del nivel de subsistencia". El problema se agrava por el hecho de que los trabajadores de estos sectores marginales no pueden defenderse en contra de la inflación. En efecto, el gran capital "resuelve" su crisis desplazándola; la crisis general refuerza las prácticas tradicionales del gran capital, esto es, obligar al Estado a socializar los costos de su capital variable y a la vez extender las necesidades y exigencias de gastos sociales.

Otra manera en que se combinan la crisis general y la crisis fiscal es mediante el proceso de internacionalización e interregionalización del capital. El capital tiende cada vez más a alejarse de las viejas zonas industriales y comerciales debido a los salarios e impuestos elevados, los reglamentos sindicales y la asistencia social, los disturbios sociales, etcétera. El capital industrial se dirige cada vez más hacia nuevos centros de acumulación por nuevos gastos de capital social de los estados del sur, del sudeste y del este para la educación, proyectos hidráulicos, proyectos espaciales, medios de transporte, parques industriales y cosas por el estilo, y también por bajos salarios y poca asistencia social, gobiernos locales y estatales antisindicales, etcétera.¹⁷ El resultado parece ser un nuevo tipo de división social y geográfica del trabajo que concentra el "trabajo intelectual" en las finanzas, la administración, la investigación y el desarrollo, etcétera; en las más antiguas ciudades capitalistas del norte (entre otras regiones), y el "trabajo manual" en las zonas rurales y en los nuevos centros de acumulación industrial del sur y del este. Este proceso de

¹⁶ Friedman rectifica otra tesis de *Fiscal Crisis* mostrando que lo que lleva a la nueva creación del pequeño capital y del ejército de reserva es la lucha entre el capital y el trabajo dentro del gran capital y no la falta de demanda (Andrew Friedman, *Industry and Labour: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism*, Atlantic Highlands, N.J., 1978).

¹⁷ El censo de 1980 arrojó que las zonas metropolitanas de crecimiento más rápido en términos de población son (por orden de tasas de crecimiento): Fort Lauderdale-Hollywood, Fla.; Phoenix; Houston, Tampa-St. Petersburg; San Diego; Orange Country, Cal.; Salt Lake City-Ogden; Denver-Boulder; Sacramento, Cal.; Dallas-Fort Worth. En el medio oeste, en el este y en el oeste, el crecimiento de la población en las zonas rurales fue significativamente mayor que en las zonas metropolitanas. En el sur ocurrió lo contrario.

repulsión/atracción y de cambio estructural de la división social del trabajo, provocado por la crisis tanto general como fiscal a la que exacerba, tiene por resultado la necesidad de mayores erogaciones sociales en las zonas capitalistas más viejas *precisamente a causa de* las mayores erogaciones de capital social en las nuevas zonas. Un desarrollo regional combinado y desigual genera conflictos sociales combinados y desiguales.¹⁸ Todo esto significa que el plan de Reagan de incrementar la industrialización en el sur y en el oeste reduciendo impuestos al capital (y también tratando, mediante cambios en el sistema del desempleo, de obligar a los trabajadores a desplazarse del norte hacia el sur en mayor número) tendrá por efecto agravar las condiciones en el norte y en el medio oeste y, por lo tanto, aumentar la demanda de mayores gastos sociales y servicios sociales. De este modo, el plan del gobierno Reagan de recuperación a corto plazo contradice profundamente su deseo a largo plazo de reducir o eliminar los derechos adquiridos.

En resumen, el medio de la reestructuración capitalista en Estados Unidos es actualmente la demoledora máquina de la inflación más bien que la depresión clásica de los valores capitalistas. Sin embargo, el gobierno Reagan tiene que escoger en algún momento entre la depresión y la planificación estatal, pues la reestructuración del capital sometido a la inflación agrava tanto la crisis económica general como la crisis fiscal. Puesto que una gran depresión es inimaginable para la clase gobernante de Estados Unidos, tanto desde el punto de vista del orden político y social interno como del externo, el papel del Estado tendrá que cambiar, dejando de ser "apoyador" para volverse "directivo",¹⁹ en particular respecto al consumidor y al crédito hipotecario, la política de ingresos, la energía, materias primas, agricultura, transportes y planificación sanitaria. Esto no significa que hay que prever *incrementos* en el gasto de capital social por parte del gobierno federal. El presupuesto de Reagan para el año fiscal 1981 pone a un lado, en realidad, muchos proyectos significativos de capital social, en particular en los campos de los combustibles sintéticos, de las autopistas y el tránsito colectivo, pero también en la educación y la ciencia.²⁰ La crisis general exige ante todo una reestructuración del capital, que requiere muy poco capital social constante, especialmente desde que la expansión económica se sitúa principalmente en campos tales como el mercado minorista, los servicios de negocios y los servicios de personal.²¹

¹⁸ Dwayne Ward fue el primero en señalarme esto.

¹⁹ J. Winkler, "Corporatism", *Archives Européennes de Sociologie*, XVII/1, 1976.

²⁰ La excepción significativa parece ser las inversiones estatales en futuro "capital humano". "Head Start", que proporciona 950 millones de dólares en servicios educativos para 374 000 niños en edad preescolar, y el programa de desayunos y comidas escolares (que asciende a 2 100 millones de dólares para 9.5 millones de escolares) permaneció inalterado en el proyecto presupuestario original de Reagan. Queda por verse si el NEA, el AFT, las instituciones científicas, etcétera, pueden impedir que los presupuestos para la educación y la ciencia se vean ampliamente reducidos.

²¹ *Fiscal Crisis* fue escrito como una interpretación de las tendencias a la crisis en los años sesenta y a principios de los setenta, y por lo tanto pasó por alto la

Cabe afirmar que cambios significativos en las ideologías reaganianas del mercado libre, que tuvieron éxito electoral debido a un sentimiento anti-gubernamental muy difundido provocado por el fracaso del Estado y de las instituciones demócratas en el manejo de las "sobrecargas de problemas", no sólo son previsibles sino inevitables.

IV.

Se plantea la siguiente pregunta: ¿es también inevitable que los cambios que he descrito provoquen realmente niveles más altos de consumo social y de gastos sociales? Dicho de otro modo, ¿cuál es la capacidad del Estado, en particular del gobierno federal, no sólo de resistir a nuevas demandas sobre el presupuesto, sino además de reducir las actuales demandas? Superficialmente, la respuesta parece ser: "el gobierno federal tiene un mandato para reducir radicalmente el presupuesto, en particular el presupuesto social, y tiene la determinación de cumplir con esto". Un examen más detenido muestra que el ataque de Reagan es menos contra las erogaciones de consumo social que contra los gastos sociales. Y menos contra la redistribución del ingreso que contra programas que socavan las formas mercancías y salario. Así, el programa de Seguro Social que cuesta 140 000 millones de dólares y beneficia a 32 millones de trabajadores jubilados permanecerá aparentemente tal cual. Pero lo mismo ocurrirá con la asistencia médica (5 400 millones de dólares, 28.6 millones de beneficiarios), el Ingreso Suplementario de Seguridad (7 900 millones, 4.2 millones de ciegos, lisiados y ancianos beneficiarios), los servicios a los veteranos de la administración (12 700 millones, 3.2 millones de personas), y (si el Senado logra imponerse) una gran parte de los programas concebidos para ayudar a las familias de bajos ingresos en sus gastos de combustible y para proporcionar indemnizaciones por la silicosis, ayuda legal a los pobres y a los lisiados. Por otra parte, los cupones alimentarios, que son compatibles con la forma mercancía de satisfacción de las necesidades pero no necesariamente con la forma salario, son severamente atacados. Y es posible que el CETA, que se opone tanto a la forma mercancía como a la forma salario, sea reducido o eliminado totalmente.²²

índole variable de los gastos de capital social durante las crisis económicas generales. Sin embargo, los gastos de capital social deben ser explicados en términos de luchas políticas así como "exigencias económicas funcionales". Así, un frente unido masivo de intereses del norte y del medio oeste pueden obligar al gobierno federal (¿bajo la forma de una candidatura presidencial de Kennedy en 1984?) a desembolsar el capital social necesario para "reindustrializar" esas regiones.

²² Las inconsistencias del programa de Reagan se ponen en evidencia en el hecho de que el Programa para Trabajos Juveniles de Verano (870 millones de dólares para 665 000 jóvenes de las ciudades) tiene posibilidades de no cambiar.

La situación es, en realidad, más complicada que esto, pues, como lo sugerí más arriba, los gastos sociales y el consumo social son variables. Siempre existe algún tipo de cambalache entre símbolos de bienestar y dinero contante y sonante según los tipos de cambio, que a su vez fluctúan de acuerdo al clima social y político. Sin embargo, como ya se observó, el gobierno federal no puede conseguir la legitimación satisfaciendo exigencias que no le cuestan ni un centavo *a la vez* a las fuerzas urbano-liberal-negro-feministas y a la "nueva derecha" (movimientos en contra del aborto, etcétera). En el mejor de los casos, podrá neutralizar a las primeras con políticas de "negligencia benigna" y de represión y movilizar a la segunda con nuevas muestras de patriotismo y de guerra fría. En este sentido, las declaraciones de política exterior de Haig son una parte indispensable de la política presupuestaria y económica de Reagan. Sin embargo, el verdadero problema para el gobierno de Reagan no es una falta de reivindicaciones y símbolos que no le cuesten nada pero que sean "vendibles". Durante los años treinta y sesenta, el problema era impedir que las clases trabajadoras lograran imponer el presupuesto social. En los ochenta, el problema de Reagan es socavar el presupuesto social que la clase trabajadora ya ha logrado imponer, o por lo menos impedir que los viejos derechos adquiridos aumenten y que se establezcan nuevos. Pero cualquier merma del presupuesto social, en la medida en que se trata de consumo social o en la medida en que una merma en los gastos sociales en la época de los "derechos adquiridos universales" también representa una amenaza para el consumo social, tiene por resultado la destrucción de capital, capital social es verdad, pero de todos modos capital. Una merma efectiva del consumo social provocaría una disminución y no un aumento de la tasa de explotación debido a los efectos adversos que tendría en las motivaciones y en la disciplina de la clase trabajadora, agravando por consiguiente la baja producción de capital.²³

En todo caso, desde un punto de vista político, es imposible que el capital estadounidense recupere su antigua posición de autoridad indiscutida dentro del capitalismo contemporáneo, en que la clase obrera constituye la gran mayoría de la ciudadanía y en que la asistencia social y el presupuesto social, la protección del medio ambiente y del consumidor están bien establecidos, a menos que se establezca una variedad de fascismo.²⁴ No obstante, a pesar de la nueva y exitosa organización política

²³ Los comentaristas liberales han confundido el problema al acusar a Reagan de recortar más los presupuestos destinados a los pobres que los destinados a la "clase media" y, por lo tanto, de valerse de criterios políticos y no económicos en la determinación del reparto de los recortes presupuestarios. Este es un buen ejemplo de cómo el pensamiento liberal sólo ve el reparto de valores y no la producción de valores. En realidad, la disminución del consumo social de la "clase media" empeoraría las relaciones de producción capitalistas y, por consiguiente, valoraría la producción. No puede decirse lo mismo de un recorte de los gastos sociales.

²⁴ Hace ocho años describí los diferentes segmentos de la sociedad estadounidense que dependen del presupuesto: los burócratas y los trabajadores pobres; los empresarios y trabajadores de la construcción y de otras industrias que viven de con-

de la clase capitalista, que participó en las campañas electorales locales y nacionales en pleno orden de batalla, la administración Reagan parece desear atenerse hasta ahora a las reglas del juego liberal democrático.

En ausencia de un claro cambio político hacia la extrema derecha, es forzoso convenir en que "las finanzas públicas pueden llegar a ser más precarias en los años ochenta que en cualquier otra época desde la gran depresión".²⁵ En efecto, esto significa que la erogación del Estado en consumo social y gastos sociales seguirá aumentando. Las razones de esto pueden clasificarse en cuatro grupos principales: el aumento de los gastos militares; el incremento de las atribuciones; el creciente fracaso de la rebelión contra los impuestos; y la ineficacia de las estrategias de "reprivatización" tendientes a reducir los gastos de los servicios gubernamentales.

En primer lugar, la clase gobernante de Estados Unidos considera que la principal amenaza al capitalismo y al poderío estadounidense es actualmente la intensificación de las luchas nacionales y sociales de los pueblos del Tercer Mundo y no las de la población norteamericana. Además, una actitud más agresiva respecto a la Unión Soviética parece ser necesaria, entre otras razones para legitimar la austeridad económica en el propio país.²⁶ Esto explica los aumentos en los gastos militares previstos en el presupuesto de Carter para el año fiscal 1981 y la obsesión de Reagan en incrementar los gastos en armamentos y reforzar las fuerzas armadas de manera considerable.

En segundo lugar, ha habido, y probablemente seguirá habiendo, un incontrolable incremento en los gastos de derechos adquiridos de todo tipo en el nivel federal. Esto es particularmente cierto para el pago de intereses sobre la deuda federal, que aumentaron en un 156% (de 29 300 millones a 74 900 millones de dólares) entre 1974 y 1980. Un 20% aproximadamente de los 604 000 millones de dólares del presupuesto federal estimado para el año fiscal 1981 se destinará al pago de intereses.²⁷ Esto también es cierto para el seguro social y la asistencia médica que aumentan en más de 25 000 millones de dólares cada año (ascendiendo a un

tratos con el gobierno; políticos locales del partido demócrata que necesitan el presupuesto para formar grupos de electores; clientes y trabajadores del Estado, etcétera. Llegué a la conclusión de que un "verdadero monopolio de clase en la política interna y en el presupuesto dependerá de la consolidación del dominio político del capital monopolista, que es una manera académica de designar la introducción de un fascismo norteamericano". "Nixon's other Watergate: the Federal Budget for FY 1974" [El otro Watergate de Nixon: el presupuesto federal para el año fiscal 1974], *Kapitalistate*, 2/1973, 11).

²⁵ Wayne Anderson, director ejecutivo de la comisión consultiva de relaciones intergubernamentales, citado en "The Pinch on Public Employees" [La reducción de los empleados públicos], *Business Week*, 23 de junio de 1980, 71.

²⁶ "Accumulation Crisis...", *op. cit.*

²⁷ Esto comparado con un 121% de tasa de crecimiento entre 1974 y 1980 para la educación, la salud y los gastos de servicios humanos, y un 71% de tasa de crecimiento de los gastos militares (Steven Seiden, "Interest in eating up the Budget" [Los intereses están devorando el presupuesto], *Business Week*, 9 de febrero de 1981).

total de 178 000 millones de dólares, o sea aproximadamente el 25% del presupuesto federal total). El aumento de los gastos sociales "incontrolables" refleja su increíble popularidad entre las clases trabajadoras²⁸ y también la ausencia de control efectivo por parte del gran capital sobre el presupuesto federal o la burocracia. De hecho, el ascenso de la clase trabajadora durante la depresión y después de la segunda guerra mundial, en particular con las organizaciones políticas de los negros y el ejército laboral de reserva en los años sesenta, obligó al capital a conceder una serie de compromisos negociados que permitieron que los sindicatos, los gobiernos estatales y locales, los empleados del Estado, las organizaciones de clientes del Estado, el capital privado con contratos con el Estado, los estudiantes, etcétera, determinaran el presupuesto social, aunque de manera muy mediatizada y contradictoria. La "socialdemocracia" introducida en la estructura del presupuesto y de la burocracia federal es quizás el mayor problema interno a que se enfrenta el gran capital. Por ejemplo, el establecimiento y el afianzamiento de normas de elegibilidad en los programas de atribuciones, una alternativa preconizada por algunos políticos del partido demócrata, requiere cambios significativos en el personal y las reglas burocráticas. Nixon pasó cuatro años tratando de granjearse el apoyo y la legitimación política con base en iniciativas de política exterior con miras, en parte, a dedicar su segundo período presidencial a purgar la burocracia federal de socialdemócratas. Sin embargo, tropezó con Watergate y la presencia demócrata, feminista, etcétera, dentro del aparato estatal, así como con los medios informativos y las instituciones educativas que, hoy en día, en forma de ideologías y prácticas ecologistas, son más fuertes que nunca. Carter no quería ni podía hacer nada acerca de este "problema" y Reagan tampoco podrá intentar lo que Nixon trató de hacer durante su segundo período si no logra ganar mucha más credibilidad de la que tiene ahora. De lo contrario, la línea política de Martin Anderson, consejero de Reagan, de que el Estado de bienestar social está consumado porque las promesas que la sociedad norteamericana ha hecho a sus ciudadanos ya han sido cumplidas o son obsoletas, no pasará de ser mera retórica ideológica. En el mejor de los casos, Reagan podrá reducir el control del partido demócrata en la Cámara en 1982 haciendo que los demócratas de la Cámara se conviertan en las víctimas propiciatorias por oponerse a la reducción de gastos y, por lo tanto, por constituir un obstáculo para la recuperación económica. Pero es poco probable que los demócratas caigan en esta obvia trampa y, además, esta (posible futura) "victoria" dista mucho de alguna purga a gran escala de socialdemócratas, laboristas, minorías, feministas, etcétera, del propio aparato estatal.

Una tercera razón que hará que los gastos públicos aumenten y que las

²⁸ Según la encuesta del *New York Times* y la CBS en febrero de 1980, el único programa realmente impopular entre los que figuraban en la encuesta fue el de los cupones alimentarios (*New York Times*, 2 de febrero de 1981).

finanzas públicas sigan siendo "precarias" es que la rebelión local contra los impuestos y el "retroceso de la asistencia social", que han sido medios por los cuales los empleados y los asalariados han tratado de proteger sus sueldos y salarios reales en contra de los estragos de la inflación,²⁹ dan ciertas muestras de debilitamiento. Los grupos de clientes del Estado, algunos sindicatos, los estudiantes, etcétera, y especialmente todos los sindicatos y asociaciones de empleados del Estado han combatido los impuestos a la propiedad y otras reducciones fiscales tomando como base el hecho de que estas reducciones constituyen una amenaza para gastos públicos necesarios y servicios sociales. Esta lucha social y económica es absolutamente crucial tanto económica como políticamente. Económicamente, porque grandes reducciones en el sistema de bienestar social recrearán una competencia más abierta entre fuerzas de trabajo productivas y los ejércitos laborales de reserva. Políticamente, porque el apoyo electoral de Reagan depende precisamente de este antagonismo básico dentro de la clase trabajadora entre, por un lado, los empleados de escasos recursos y los asalariados que han apoyado los recortes de impuestos y que, de modo irracional, han sido hostiles a los programas sociales y, por otro, los ejércitos laborales de reserva que, junto con los trabajadores del Estado, dependen del presupuesto social. Así, a pesar del apoyo significativo de los obreros a los recortes en programas destinados a los "inmeritorios pobres", las luchas por evitar la nueva creación de las condiciones del mercado de trabajo del siglo XIX no han sido totalmente vanas. En primer lugar, como ya lo mencioné, los recortes en los programas sociales del presupuesto federal no gozan de un amplio apoyo político (con excepción de los cupones alimentarios). La mayoría de la gente preferiría, aparentemente, luchar contra la inflación equilibrando el presupuesto y no disminuyendo los impuestos.³⁰ En segundo lugar, los recortes anunciados en el presupuesto social han provocado de inmediato nuevas coaliciones de sindicatos, de organizaciones de mujeres, de negros, de los ecologistas y de otros, que sin duda abrirán la brecha para una candidatura de Ted Kennedy en 1984. En tercer lugar, durante las elecciones de 1980, el frenesí por la Propuesta 13 de California no sumergió al país. En tanto que los impuestos a la propiedad fueron considerablemente reducidos en Massachusetts (famoso por sus altas tasas de impuestos a la propiedad, sus escuelas mal administradas y su corrupción), provocando un caos

²⁹ Como lo muestra Robert Kuttner (*Revolt of the Haves*, Nueva York, 1980), la rebelión en contra de los elevados impuestos a la propiedad es esencialmente un movimiento de la "clase media" en la medida en que está formado por trabajadores y personal asalariado del capital a gran escala, profesionistas, y pequeños hombres de negocios. La rebelión es en contra de la redistribución dentro de la clase trabajadora y el asalariado en provecho de los trabajadores del pequeño capital, los desempleados, los subempleados, etcétera. No es un movimiento de extrema derecha aunque la extrema derecha se ha beneficiado mucho con él.

³⁰ Steven Roberts, "Reagan's Budget Battle" [La batalla presupuestaria de Reagan], *The New Times*, 11 de febrero de 1981, 10, en que cita la encuesta del *Times* y la CBS.

fiscal en ese Estado, otras medidas de recortes de impuestos fueron electoralmente rechazadas en media docena de estados. En cuarto lugar, los gobiernos locales y estatales han promulgado nuevas leyes de impuestos y las amplias reducciones prometidas en los impuestos a los ingresos personales no parecen ser para un futuro próximo, pues el Congreso no tiene la intención de adherirse a la teoría económica de la oferta.

La razón fundamental del relativo debilitamiento de la rebelión contra los impuestos, y también de la renuncia a apoyar recortes específicos en el presupuesto social, es la profunda contradicción a la que se enfrentan la clase trabajadora empleada y los asalariados. Estas categorías han conseguido derechos establecidos a nivel federal a lo largo de décadas de acción social y de presión política, que se han añadido a presiones inflacionarias. La lucha en contra de las reducciones en los sueldos y salarios reales (esto es, la lucha contra la inflación) en forma de rebeliones locales contra el pago de impuestos, significa que los trabajadores empleados están luchando de hecho contra sí mismos, por lo menos en la medida en que los recortes de impuestos locales, estatales y federales amenazan los derechos establecidos y el presupuesto social en su conjunto. En efecto, ciertos signos muestran que cada vez más gente presta atención a las organizaciones de trabajadores estatales "de vanguardia" y actúa de acuerdo con sus propios intereses objetivos, o sea que se opone a que el capital haga marcha atrás en la historia y restablezca toda una serie de divisiones dentro de la clase trabajadora, que habían sido en cierta medida exitosamente superadas gracias a las luchas históricas de los sindicatos, los negros, los trabajadores del Estado, los clientes, las mujeres, etcétera. En resumen, en la medida en que la clase trabajadora en su conjunto actúe de acuerdo con sus propios intereses objetivos en el frente económico será mucho más difícil que el capital restablezca su dominación social y política sobre el trabajo. Los ingredientes faltantes en el programa "implícito" de la clase trabajadora son la exigencia de restablecer el relajamiento de la tirantez con la Unión Soviética a fin de crear las condiciones para una reducción del presupuesto militar; la exigencia de que el gobierno federal deje de intervenir en las luchas de liberación nacional en el mundo; la exigencia de que los pagos de intereses sobre la deuda nacional sean reducidos; y la exigencia de una red de servicios comunitarios y de consumo colectivo ampliamente extendida y organizada por la propia gente (que impugnaría directamente la forma mercancía de satisfacción de las necesidades, así como la fuerza salario, reduciendo por consiguiente el costo de reproducción de la clase trabajadora).

Por último, los gastos estatales seguirán creciendo probablemente porque el principal intento por controlar los costos de los servicios estatales ha fracasado. La "reprivatización" de los servicios sociales y la "contracción hacia afuera" no han proporcionado el alivio fiscal que en un momento

se pensó posible y real.³¹ Resulta interesante e irónico que el propio ministro de la Marina de Reagan haya denunciado la incompetencia de los contratistas militares que construyen los submarinos nucleares y haya amenazado con obligar al gobierno federal a participar en el negocio de la subfabricación. El fracaso de la “reprivatización” para suponer la crisis fiscal, y el constante mal manejo y la ineficiencia en el campo de los materiales militares que mitiga el entusiasmo por la “reprivatización”, ha significado que las listas de pagos de las ciudades, los condados y los estados aumentaron en un 108% entre 1970 y 1978 (un poco menos que el aumento en los salarios en el sector privado), que a su vez significa que las tendencias estructurales a la crisis fiscal son mayores que nunca. Las instituciones corporativas liberales, al menos, reconocen el poder estructural de los trabajadores estatales, que incrementa su capacidad de proteger sus sueldos y salarios, sus condiciones de trabajo y, con la salvedad de “casos especiales” como la ciudad de Nueva York donde las divisiones dentro de la clase trabajadora son asombrosamente profundas, su empleo.³² En tanto que los despidos de personal gubernamental y los recortes en los servicios sociales a nivel local han causado muchas dificultades durante el último lustro, hay signos de que los movimientos de unidad dentro de la clase trabajadora, las organizaciones feministas, los grupos municipales, etcétera, tienen serias posibilidades de hacer frente a los retos planteados por el gobierno de Reagan en los años ochenta. La razón principal será el fracaso económico de la administración. Suponiendo que logre imponer al Congreso sus grandes recortes fiscales, el resultado de ello será aumentar los gastos de consumo y las inversiones especulativas. Esto se debe a que las inversiones productivas tardan en producirse no a causa de una insuficiencia en los ahorros personales sino debido a tasas de ganancia insuficientes. Además, suponiendo que Reagan pueda efectivamente reducir en 30 000 o 45 000 millones de dólares el presupuesto federal, los efectos que esto tendrá en la inflación en una economía cuyo PNB es de 3 billones de dólares serán leves. En mi opinión, las políticas económicas de Reagan fracasarán lastimosamente, en parte debido a un mal asesoramiento eco-

³¹ No es posible discutir aquí cabalmente acerca de la “reprivatización”. Basta con decir que este procedimiento asume varias formas. En primer lugar, la mencionada “contracción hacia afuera”. En segundo lugar, las transferencias monetarias que permitirán que la gente compre servicios en el mercado abierto (por ejemplo certificados de educación). En tercer lugar, transferir los servicios estatales a la familia en general y a las mujeres en particular (solución deseada por la nueva derecha). En cuarto lugar, autoorganización de las necesidades colectivamente por la gente que participa de manera directa en el suministro y el uso de servicios (la mejor solución desde el punto de vista de la clase trabajadora).

³² “El poder de los empleados públicos de causar irritación o molestias al público no debe ser reprimido del todo. Eso resultaría excesivamente costoso en caso de que fuera posible. Además, tal medida privaría innecesariamente a los empleados de una dosis de poder que es deseable que ellos posean a fin de proteger sus propios intereses y de disuadirlos a que busquen poder por otros medios”. (Committee for Economic Development) [Comité para el Desarrollo Económico], *Improving Management of the Public Work Force*, noviembre de 1978, 89).

nómico, en parte debido a la resistencia popular en contra de sus políticas, en particular las políticas presupuestarias, que aumentarán proporcionalmente al tropiezo de sus políticas, y en parte también debido a que la crisis general y la crisis fiscal no tienen arreglo fuera del contexto de profundos cambios en las condiciones de la reproducción material de la vida cotidiana. El verdadero peligro es que Reagan sucumba a la tentación de desatar una guerra para mantener a los republicanos en el poder en 1982 y a él mismo como presidente en 1984.

Para concluir, la persistencia de las tensiones fiscales y sociales durante la década de los años setenta, que son en parte causas y en parte efectos de la crisis económica general, ha obligado al Estado a aplicar varias tácticas desviadas o indirectas a fin de reducir el presupuesto y expulsar a las fuerzas liberales / *new deal* / nueva izquierda de la burocracia estatal. Pero todas estas tácticas ya han demostrado su ineficacia o amenazan con probarla en el futuro. En primer lugar, tenemos el intento por centralizar el proceso de determinación presupuestaria en el nivel federal. En su proyecto de presupuesto para el año fiscal 1981, Carter propuso una ley de "reconciliación" que impondría límites estrictos a los gastos federales. El objetivo era neutralizar intereses especiales que deseaban ser exentos de recortes presupuestarios, pero este proyecto se topó con la oposición de comités del Congreso que trataban de defender esos intereses especiales así como los propios. Reagan ha sugerido volver a esta táctica por medio de un referéndum para determinar el presupuesto en forma de una sola ley que recortaría todo tipo de gastos. El "peligro" es que cualquier intento por reprimir los "intereses especiales" y la determinación normalmente plural del presupuesto será contraproducente y transformará las luchas presupuestarias particulares en luchas de clase abiertas.

En segundo lugar, tenemos el intento de aliviar la crisis fiscal otorgando a los estados y a las ciudades subsidios federales en bloque para encubrir las reducciones en las cuotas de ingresos y diluir las normas nacionales en el campo de la asistencia social y en otros. El gobierno Reagan quiere consolidar aproximadamente cien categorías de subvenciones en unos cuantos grupos de subvenciones para la educación, la salud y los servicios sociales. Esto brindaría a los gobiernos estatales y locales más flexibilidad en su uso de los fondos federales y, por lo tanto, la Asociación Nacional de Gobernadores apoya esta medida (aunque desea que el gobierno federal siga pagando la asistencia social y médica). El "peligro" es que su mayor control local de las decisiones presupuestarias proporcione nuevos terrenos de lucha para las fuerzas progresistas locales. En tercer lugar, tenemos el intento parcialmente exitoso de suprimir servicios sociales so pretexto de "condiciones extraordinarias" o de "bancarrota" de los gobiernos locales. Cuando esto ha ocurrido, se ha acompañado a menudo de una profunda radicalización de los programas sociales y/o del personal gubernamental local. En cuarto lugar, los gobiernos estatales y locales han elaborado nuevas formas indirectas de "contraer hacia afuera" con miras a evitar que los sindicatos de trabajadores estatales se afiancen.

Los recortes de Reagan al CETA, que pueden obligar a algunos gobiernos locales a adquirir servicios del capital "socioindustrial", son un contraataque federal a los programas locales progresistas.

En resumen, a pesar de la crisis actual, la estrategia de la nueva izquierda de la "larga marcha a través de las instituciones" no está en absoluto moribunda. La democratización de algunos gobiernos locales y estatales, la radicalización del personal estatal, el desarrollo de las relaciones entre los grupos de trabajadores estatales y de las coaliciones que se oponen a los recortes presupuestarios, al igual que otros fenómenos similares, muestran que el sueño del triunfo de la sociedad sobre el capital y el Estado sigue en vida, aunque reconocemos que no goza de excelente salud.

Traducción: Óscar Barahona